

TÍTULO:	TARDA EN LLEGAR, Y AL FINAL HAY RECOMPENSA
AUTOR/ES:	Waissman, Juan
PUBLICACIÓN:	Doctrina Penal Tributaria y Económica ERREPAR
TOMO/BOLETÍN:	-
PÁGINA:	-
MES:	Enero
AÑO:	2024
OTROS DATOS:	-

JUAN WAISSMAN

TARDA EN LLEGAR, Y AL FINAL HAY RECOMPENSA⁽¹⁾

COMENTARIO A LA RESOLUCIÓN (PGN) 92/2023

Con no poca sorpresa, pero con un agrado velado, advertimos el dictado de la resolución 92/2023 de la Procuración General de la Nación (en adelante, PGN), de fecha 7 de diciembre de 2023, que lleva la firma del Procurador General de la Nación Interino.⁽²⁾

En ella se resuelve “...instruir a las y los fiscales con competencia penal para que adecuen su intervención en el trámite de los acuerdos conciliatorios [arts. 59, inc. 6), CP y 34, CPPF] a las pautas expuestas en el considerando IV”.

Han sido incontables las veces que, desde el año 2015, hemos sostenido la necesidad de una instrucción similar, que tornara la norma que estipula las causales de extinción de la acción (situada en la parte general del [Código Penal](#)) en una norma operativa. Decimos que desde esa oportunidad abogamos por tal indicación, puesto que es la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la [ley 27147](#) que incorpora esta causal en el artículo 59, inciso 6).

Sin embargo, es cierto que mucha tinta ha corrido para que se materialice la resolución en análisis, y la demora obedeció también a cuestiones de política criminal y de implementación -y operatividad- del [Código Procesal Penal Federal \(CPPF\)](#).

Auguramos que corra aún más tinta, puesto que, como se verá en el apartado de las críticas, aún el instituto no lleva una regla de aplicación para delitos penales tributarios, ni tampoco existe un émulo de la presente resolución para supuestos de reparación integral [casualmente obrante en el mismo inc. 6) del art. 59, CP].

I - BREVE ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN

En primer lugar, ya desde los “VISTOS” se advierte que la propuesta viene de la mano de un cambio paradigmático; nos referimos al sistema acusatorio.⁽³⁾

En lo que deviene dogmáticamente relevante, hace especial énfasis en los *métodos alternativos de solución de conflictos* en materia de derecho penal, con los que somos especialmente cercanos, habiéndonos inclinado a su favor hace ya mucho tiempo, y siendo material y dogmáticamente coincidentes con la pretendida mutación tanto del *injusto penal* como del *conflicto penal* en sentido lato.

Subrayamos permanentemente en cada foro en el que intervenimos la necesidad de dotar de operatividad no solo la intención del legislador al incorporar los métodos extintivos al *corpus* del Código de fondo, sino el *aggiornamento* a los métodos en los que se ha embarcado el mundo desde hace ya largo tiempo.

De la misma manera en que la República Argentina integra hace tiempo el concierto global de naciones que tienen como norte la persecución del crimen organizado, la alerta por aquellos delitos que pueden constituirse en precedentes para fondear el lavado de lavado de activos y la financiación del terrorismo, y el patrocinio de organizaciones terroristas, etc., nos enrolamos -al menos de manera liminar- en mutar hacia un régimen acusatorio y, por consiguiente, a explorar métodos alternativos de solución de los conflictos penales.

Sin embargo, es lógico que, en ese camino, deba prestarse especial atención al sistema de garantías constitucionales de las que gozan todos los justiciables, a la vez que deba tenderse a garantizar una aplicación uniforme de las reglas para todo el territorio nacional.

Por último, como bien sustenta la resolución, estamos frente a un complejo entramado que aborda:

- a) la adecuación sistémica que se propone;
- b) los sistemas alternativos de solución de conflictos;
- c) los criterios de oportunidad, y
- d) las medidas de coerción y la revisión de las sentencias del nuevo sistema acusatorio.

1. De la operatividad de las normas del Código Federal

Sostuvimos desde la génesis del planteo que las reglas que se desprendían del artículo 34⁽⁴⁾ resultaban operativas aun en las condiciones parciales de vigencia del CPPF.

A *posteriori*, la propia Cámara de Casación emitió el ya famoso precedente "Villalobos"⁽⁵⁾ y los incontables fallos que le siguieron.

Ellos resultan relevantes en el aspecto citado, puesto que establecen que "*las vicisitudes de la implementación de un Código adjetivo no pueden impedir la aplicación de dos causales de extinción de la acción penal que se encuentran vigentes en el Código de fondo, máxime cuando lo concerniente a la procedencia en el caso concreto será materia de debate en los tribunales*".⁽⁶⁾

También allí se señala: "*si bien esta reforma se engloba en lo que se denomina 'justicia restaurativa', y tiene como eje y centro a la víctima del delito, es evidente que la posibilidad para el imputado de extinguir la acción emergente del delito por la reparación del daño y/o conciliación lo coloca en una mejor situación procesal que, de adverso, debería enfrentar un debate oral y la posibilidad de sufrir una pena de encierro de efectivo cumplimiento, aspecto que constituye un interés legítimo del acusado en los términos del precedente 'Padula' (sobre el art. 76 bis, CP) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 320:2451)*".

Si bien hemos sido testigos de una implementación en etapas -progresiva- del CPPF, creemos que es sumamente valioso que el Ministerio Público Fiscal exhiba abiertamente los "...criterios de política criminal que aseguren una actividad

homogénea y previsible por parte de sus representantes y, por otro, dar a conocer a la ciudadanía los criterios de persecución penal que la nutren”.

2. Reglas de disponibilidad

El CPPF inaugura, en su sección segunda, las denominadas *reglas de disponibilidad de la acción*, entre las que encontramos tanto los criterios de oportunidad, la conversión de la acción y la conciliación como la suspensión del proceso a prueba.

Expresamente el artículo 30 reza:

“Disponibilidad de la acción. El representante del Ministerio Público Fiscal puede disponer de la acción penal pública en los siguientes casos: a) criterios de oportunidad; b) conversión de la acción; c) conciliación; d) suspensión del proceso a prueba. No puede prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo, o cuando apareciere como un episodio dentro de un contexto de violencia doméstica o motivada en razones discriminatorias. Tampoco podrá en los supuestos que resulten incompatibles con previsiones de instrumentos internacionales, leyes o instrucciones generales del Ministerio Público Fiscal fundadas en criterios de política criminal”.

En sucesivos artículos del citado Código adjetivo se desarrollan (ver arts. 30 al 35) los demás subpuntos.

3. La conciliación penal

Las señales descriptas, que llamaremos con fines didácticos de implementación, requieren indefectiblemente establecer criterios generales de acción, máxime considerando las características propias del Ministerio Público Fiscal y su principio de unidad de actuación [cfr. art. 9, inc. a), de la ley orgánica del MPF⁽²⁾].

Puntualmente, en el caso *sub examine*, la consideración de los acuerdos conciliatorios en materia penal.

Recordemos que el texto del CPPF⁽⁸⁾ establece lo siguiente:

“Art. 34 - Conciliación. Sin perjuicio de las facultades conferidas a los jueces y representantes del Ministerio Público Fiscal en el artículo 22, el imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas, o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte. El acuerdo se presentará ante el juez para su homologación, si correspondiere, en audiencia con la presencia de todas las partes.

La acreditación del cumplimiento del acuerdo extingue la acción penal; hasta tanto no se acredite dicho cumplimiento, el legajo debe ser reservado. Ante el incumplimiento de lo acordado, la víctima o el representante del Ministerio Público Fiscal podrá solicitar la reapertura de la investigación”.

Sobre el particular, la resolución nos ilustra sobre los fundamentos intrínsecos del instituto de la conciliación penal, en tanto postula que *“...busca dar una respuesta alternativa para hechos de menor lesividad, con la finalidad de otorgar una solución temprana que armonice los intereses de la víctima y de la persona imputada, al mismo tiempo que restablezca la paz social. Como consecuencia del acuerdo celebrado, una vez homologado jurisdiccionalmente y siempre que se verifique su cumplimiento, se extinguirá la acción penal”.*

En ese sentido, armoniza el instituto dogmático y lo acerca a las atribuciones propias del titular de la acción pública (el MPF), al tiempo que lo presenta en su rol intermedio que pretende armonizar el interés de la víctima, con la persecución intensiva de los delitos que merecen ser perseguidos -dejando por *contrario imperio* métodos alternativos para los residuales-.

4. Efectivización

El apartado IV describe los criterios de aplicación, señalando lo siguiente:

Intervención necesaria del Ministerio Público Fiscal en el acuerdo conciliatorio

Creemos que la norma sobreabunda en un tema que no resulta necesario. La referencia a la importancia del acuerdo y sus efectos extintivos por sobre la acción devienen evidentes.

Igual de evidente resulta la obligación procesal de garantizar la intervención del Ministerio Público Fiscal, puesto que el juego armónico de la política criminal y la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad así lo demandan.

Por consiguiente, la ausencia de tal convocatoria implicaría la obligación inherente del planteo de nulidad, debiendo desplegarse los mecanismos adjetivos previstos a ese efecto.

Regulación de los supuestos para la aplicación de la conciliación

Aquí se cita una serie de regulaciones normativas, subnormativas, de derecho internacional, etc., a las que adhirió la República Argentina y que deben obviamente ser respetadas. (9)

Va de suyo que las normas descriptas operan como valladar para la disponibilidad de la acción penal por el mecanismo de conciliación, ya que esos mandatos han sido asumidos por la República Argentina y suponen un compromiso internacional ineludible.

Regulación de los supuestos de aplicación de la conciliación fundados en razones de política criminal

Los supuestos que aborda la resolución imposibilitan promover y consentir los acuerdos conciliatorios.

Ahora bien, la descripción no es taxativa, sino meramente enunciativa, por lo que podrían presentarse otras circunstancias que -a juicio de los y las fiscales intervinientes- también lo impidan.

CONDENAS DE LA PERSONA IMPUTADA

i) Condenas de cumplimiento efectivo

La regla es simple; el fiscal debe oponerse en este caso.

El supuesto es abarcativo de penas que aún se estén ejecutando (bajo cualquier modalidad) cuando haya sido condenada previamente a una pena de este tipo y el nuevo hecho fuese cometido en el plazo legal que, en caso de recaer sentencia condenatoria, correspondiera la declaración de reincidente; también lo será cuando la pena de encierro efectiva se haya dado por compurgada con el tiempo de detención preventiva cumplida.

Luego, la resolución ahonda en los fundamentos del temperamento que postula.

ii) Condena de ejecución condicional

Otra causal para oponerse radica en que la persona imputada haya sido condenada a una pena de prisión de ejecución condicional que aún se encuentre en la etapa prevista en el artículo 27 bis del Código Penal (10) o, si al momento del nuevo hecho, no hubiesen ocurrido ocho años desde la primera condena firme de esta especie o diez años si ambos delitos fueran dolosos (art. 27, párrafos primero y segundo, CP). (11)

Nuevamente, la resolución ahonda en los fundamentos del temperamento que postula.

REITERACIÓN EN EL USO DE LAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS AL CONFLICTO PENAL

i) Suspensión del proceso a prueba

También se encuentra vedada la anuencia del fiscal si se verifica que la persona imputada haya sido investigada en otro proceso en el que se resolvió, a su respecto, la suspensión del proceso a prueba, ya sea que esta se encuentre en curso, o bien no haya transcurrido un tiempo mayor o igual a ocho años contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo por el cual se hubiera concedido este instituto.

Una vez más, la resolución ahonda en los fundamentos del temperamento que postula.

ii) Acuerdos conciliatorios

Idéntica solución debe primar si la persona imputada haya sido investigada en otro proceso en el que se resolvió a su respecto la homologación de un acuerdo conciliatorio y no haya transcurrido un tiempo mayor o igual a ocho años.

MULTIPLICIDAD DE DELITOS

Ante un supuesto de imputación de múltiples delitos, siendo que uno de ellos fuera pasible de ser conciliado, ha de primar el sentido común y los intereses subyacentes, por lo que habrá de impedirse que el imputado pueda optar entre diferentes formas de finalización en lo que respecta al trámite de los procesos que se siguen en su contra.

Resulta contrario al criterio general hacer lugar a la conciliación en uno de los múltiples delitos, por lo que habrá de oponerse cuando los hechos investigados resulten alcanzados por más de una calificación legal y alguna de ellas no lo permita.

Es decir que, en este caso, el supuesto no contemplado dentro de los posibles delitos susceptibles de conciliación es el que se ofrece como rector en la acción negativa, trasvasando sus efectos a los demás delitos que pueden -eventualmente-, y si concurrieran de forma individual y no múltiple, verse afectados por el instituto.

5. El rol de la víctima

Se establece una serie de pautas de acción en torno a la actividad y rol de la víctima en el acuerdo conciliatorio, razón por la cual se instituyen criterios rectores que apuntan a la agilidad que debe imprimírsele al trámite, sin desatender la información con la que debe contar quien acuerda.

Recordemos que conciliar implica conceder recíprocamente⁽¹²⁾, y para ello uno debe ser el titular de un derecho. El ejercicio de ese derecho -el de conciliar en este caso- debe ser motivado.

Solo puede corroborarse dicha motivación en tanto la víctima se encuentre debidamente informada del alcance y consecuencia de sus actos.

Resulta indispensable no soslayar indicios de vulnerabilidad, *"...a partir de la existencia de una desigualdad provocada por una situación de poder o capacidad económica que pueda ser aprovechada por el imputado al momento de ofrecer el acuerdo"*, sobre lo que la resolución pone especial énfasis.

6. Oportunidad procesal del acuerdo conciliatorio

Sobre este punto, la resolución acertadamente recuerda que, conforme el texto del CPPF⁽¹³⁾, los acuerdos conciliatorios pueden ser propuestos hasta la audiencia de control de la acusación.

Sin embargo, y a fin de prever contingencias en jurisdicciones en las que continúe vigente el CPPN, se estipula que *"...solo pueden proponer o aceptar acuerdos conciliatorios que se celebren antes de que se disponga la clausura de la instrucción (art. 349, CPPN) o se dicte auto de elevación a juicio (arts. 351 y 353 quinquies, CPPN), ya que resulta la etapa procesalmente más equiparable a la prevista en el CPPF. Esta determinación será aplicable a aquellos casos que se inicien a partir de la vigencia de la presente y no alcanza a los procesos iniciados con anterioridad"*.

II - A MODO DE CONCLUSIÓN

1. Sobre la importancia de la resolución en el campo normativo

No somos ajenos ni a la coexistencia -actual, pero tendiente a desaparecer tarde o temprano- del sistema acusatorio adversarial y del sistema mixto, ni tampoco a las facultades inherentes del órgano rector, que por otra parte tiene a su cargo el ejercicio y la disposición de la acción penal. ⁽¹⁴⁾

Va de suyo que se requiere, para que tenga pleno efecto el acuerdo conciliatorio en sede penal, de la voluntad del imputado cuanto del ofendido; sin embargo, la intervención del MPF resulta ineludible, dado que este se constituye, en definitiva, en el garante de los límites normativos y su apego a la política criminal imperante.

2. La priorización del sistema y la atención a la víctima como ejes de implementación

El término clave -amén de aquel que presupone una aplicación sin distinción de jurisdicciones- es *armonización*.

Si se pretende un paso sostenido, seguro y constante de un sistema a otro, resulta indispensable que esa mutación no altere garantías de raigambre constitucional, a la vez que persiga y logre los objetivos que se propone.

La paz social, la participación de la víctima en el proceso y la búsqueda de la solución del conflicto resultan ser sistémicamente prioritarios.

Como bien se postula el finalizar el apartado II de la resolución, acuden a fundamentar tales objetivos los *artículos 12 y 22 del CPPF, y 9, inciso e), de la ley 27148*, a la vez que se deben instaurar postulados de *política criminal derivados del cumplimiento de las obligaciones asignadas a este organismo de velar por los intereses generales de la sociedad [arts. 30 del CPPF -parte final-, 33, incs. d) y e), L. 24946 y 12, incs. a) y h), L. 27148], a fin de concretar el principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal [arts. 1, L. 24946 y 9, inc. a), L. 27148]*.

3. El puntapié inicial, pero no exento de críticas

Si bien estimamos que es un paso en la dirección correcta, aunque -debemos decirlo- llega con alguna demora, más vale tarde que nunca.

Creemos indispensable -y de previo análisis- el repaso de sendos extremos frente a la aplicación del instituto. Así, conocer los roles del ofensor y la víctima, sus derechos, los delitos y su aptitud para que la acción sea conciliable resultan determinantes.

La misma importancia debe dársele a los bienes jurídicos -eventualmente supraindividuales en la especie- que se pretenden tutelar, por lo que se recomienda la atenta lectura de una obra insoslayable referida al tema en trato de Corcoy Bidasolo. ⁽¹⁵⁾

Sin embargo, no podemos dejar de señalar algunos aspectos que entendemos mejorables y que han de ser expuestos como críticas, para que -con espíritu constructivo y superador- puedan constituirse en puntos de análisis y, eventualmente, oficiar de disparadores para hacer la norma más abarcativa y, por tanto, justa.

A saber:

- Llamativamente la resolución no efectúa referencia alguna a un tópico por demás álgido actualmente; nos referimos a la aplicación del instituto al Régimen Penal Tributario. La norma nada dice sobre el particular, lo que es una señal poco auspiciosa.

En el sentido antedicho, estimamos que la crítica es acertada; la norma debería referirse expresamente a la conciliación penal aplicable a la materia penal tributaria, al igual que debería existir una resolución similar para instruir a los fiscales respecto

de la aplicación del instituto de la reparación integral [también contenido en el art. 59, inc. 6), CP].

Más allá de la ausencia de tratamiento *ex professo*, somos de la idea de que esta circunstancia no sería óbice para que derrame en la esfera del derecho penal tributario, ya que de la letra de la ley no se desprende exclusión de ninguna índole, y como es bien sabido, el primer método de interpretación no es otro que el literal⁽¹⁶⁾ (por vía de referencia expresa u omisión). En el mismo sentido debe estarse al evidente *fin que inspira la ley*.⁽¹⁷⁾

- La resolución hace referencia a la necesidad de que intervenga (con un rol acotado) el Ministerio Público Fiscal en los acuerdos conciliatorios. Coincidimos con ello.

Sin embargo, creemos criticable el argumento vertido en la última parte del punto III de la resolución en trato, que reza:

"...Por lo tanto, la formulación de una oposición fundada debe ser obstáculo suficiente para evitar que se homologue el acuerdo y, posteriormente, se extinga la acción [arts. 59, inc. 6), CP y 34, CPPF]".

Creemos que, sin perjuicio de la necesaria intervención del Ministerio Público Fiscal, la oposición (cuando se cuenta con la voluntad del ofendido y del imputado) no puede constituirse sin más en un DEBER del juez para evitar la homologación del acuerdo.

Sostenemos que un juez de la constitución no DEBE indefectiblemente -por la mera oposición del MPF- denegar la homologación del acuerdo que lleva la voluntad del imputado y del ofendido.

Sí sostenemos que debe evaluarse dicha oposición fundada, pero ello no puede llevar automáticamente a una negativa, so pena de relegar al juez a un rol de autómatas que no encuentra un reflejo constitucional acorde a la investidura.

- En supuestos en los que exista una multiplicidad de víctimas por la comisión de un mismo hecho, solo se autoriza a prestar conformidad si existe unanimidad.

Si bien entendemos que el instituto importa la extinción de la acción, creemos que en algunos supuestos esta condición puede ir en detrimento del objetivo final que busca el legislador al instaurar el método alternativo.

Creemos entonces que podrían buscarse soluciones intermedias sin boicotear (al menos respecto de las víctimas que no alcanzan la unanimidad y el ofensor), sosteniendo la acción respecto de aquellos que no alcanzan el acuerdo conciliatorio.

Advertimos que la cita de normas⁽¹⁸⁾ que hace la resolución no resulta adecuada, toda vez que las mismas refieren a los derechos de las víctimas, mas ningún derecho se vería conculcado de adoptarse la solución que se propone en este apartado.

Notas:

(1) Gustavo Cerati y Mercedes Sosa: "Zona de promesas"

(2) Eduardo Ezequiel Casal

(3) Se citan tanto los artículos de la Constitución Nacional, como la R. 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF, las R. (PGN) 97/2019 y 41/2023, y las propuestas de la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios, y de la Unidad Estratégica para la Implementación del Sistema Acusatorio

(4) CPPF, art. 34: "Conciliación. Sin perjuicio de las facultades conferidas a los jueces y representantes del Ministerio Público Fiscal en el artículo 22, el imputado y la víctima pueden

realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas, o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte. El acuerdo se presentará ante el juez para su homologación, si correspondiere, en audiencia con la presencia de todas las partes.

La acreditación del cumplimiento del acuerdo extingue la acción penal; hasta tanto no se acredite dicho cumplimiento, el legajo debe ser reservado. Ante el incumplimiento de lo acordado, la víctima o el representante del Ministerio Público Fiscal podrá solicitar la reapertura de la investigación"

(5) CFCP - Sala IV - 29/8/2017 - Causa CCC 25020/2015/TO1/CFC1 - Reg. 1119/17, "Villalobos, Gabriela Paola y otros s/defraudación"

(6) "Villalobos", cit. en nota 5 (del voto del juez Hornos)

(7) "Art. 9 - Principios funcionales. El Ministerio Público Fiscal de la Nación ejercerá sus funciones de acuerdo con los siguientes principios: a) Unidad de actuación: el Ministerio Público Fiscal de la Nación es una organización jerárquica cuya máxima autoridad es el Procurador General de la Nación. En su actuación es único e indivisible y estará plenamente representado en la actuación de cada uno de sus funcionarios. Cada funcionario controlará el desempeño de quienes lo asistan y será responsable por la gestión de los funcionarios a su cargo. Estos actuarán según las instrucciones impartidas por sus superiores y conforme a lo previsto en esta ley..." (texto obrante en el repositorio digital -https://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2018/08/Ley_organica_2018.pdf-)

(8) Código Procesal Penal Federal (denominación según art. 1, L. 27482). [L. 27063](#). Aprobación. Anexo I, D. 118/2019

(9) *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, las leyes que establecen la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la ley de violencia familiar. Lo mismo respecto de los delitos cometidos por funcionarios públicos. En igual sentido, los delitos motivados en razones discriminatorias, debiendo atenderse a lo normado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores y las disposiciones de la [L. 23592](#) sobre actos discriminatorios*

(10) Art. 27 bis, CP: "Al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, el Tribunal deberá disponer que, durante un plazo que fijará entre dos (2) y cuatro (4) años según la gravedad del delito, el condenado cumpla todas o alguna de las siguientes reglas de conducta, en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos:

1. Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.
2. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas.
3. Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.
4. Asistir a la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida.
5. Realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional.
6. Someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia.
7. Adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad.
8. Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado, o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo.

Las reglas podrán ser modificadas por el Tribunal según resulte conveniente al caso.

Si el condenado no cumpliere con alguna regla, el Tribunal podrá disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento. Si el condenado persistiere o reiterare el incumplimiento, el Tribunal podrá revocar la condicionalidad de la condena. El condenado deberá entonces cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia"

(11) Art. 27, CP: "La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el condenado no cometiere un nuevo delito. Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme con lo dispuesto sobre acumulación de penas.

La suspensión podrá ser acordada por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho (8) años a partir de la fecha de la primera condena firme. Este plazo se elevará a diez (10) años, si ambos delitos fueran dolosos.

En los casos de sentencias recurridas y confirmadas, en cuanto al carácter condicional de la condena, los plazos se computarán desde la fecha del pronunciamiento originario"

(12) Para la RAE, el término "conciliar" supone: "1. Tr. Poner de acuerdo a dos o más personas o cosas"

(13) Art. 279, CPPF: "Audiencia de control de la acusación. Desarrollo. Vencido el plazo del artículo 277, la oficina judicial convocará a las partes y a la víctima, si correspondiere su intervención, a una audiencia a celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de que el juez de revisión al que le corresponda intervenir en esta audiencia tenga el asiento de su despacho en un lugar distinto al del Juzgado de Garantías que intervino en el proceso, esta audiencia podrá realizarse de forma remota y por medios audiovisuales. La parte que opte por participar en la audiencia de manera presencial tendrá la facultad de concurrir a la sede de la oficina del juez de revisión interviniente. Como cuestión preliminar, el acusado y su defensa podrán: ... d) Proponer reparación, conciliación, la suspensión del juicio a prueba o la aplicación de procedimiento abreviado..."

(14) Cfr. [art. 5, CPPN](#), y [arts. 25 y 30, CPPF](#)

(15) Corcoy Bidasolo, Mirentxu: "Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales" - Ed. Tirant lo Blanch - 1999 - ISBN 9788480029766

(16) CSJN - Fallos: 326:4909, entre otros

(17) CSJN - Nota de jurisprudencia - "La finalidad de la ley como criterio de interpretación": "...debe preferirse siempre la interpretación que favorezca a los fines que inspiran la ley y no la que los dificulte (Fallos: 326:3679; 330:2093; 344:223; 344:2513). Así, indicó que al interpretar una norma, es necesario indagar la ratio legis y el espíritu de la misma, extremos que no deben ser obviados por posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente para evitar la frustración de los objetivos del precepto legal (Fallos: 344:1539). Ello, ya que no es el espíritu de la ley el que debe subordinarse a las palabras, sino estas a aquel, máxime cuando aquella 'ratio' se vincula con principios constitucionales que siempre han de prevalecer en la interpretación de las leyes (Fallos: 323:212)"

(18) Art. 5, inc. k), L. 27372 y art. 80, inc. h), CPPF